

# El Govern admite que las personas con discapacidad tienen derechos “de papel”

La sociedad civil impulsa una plataforma para aplicar un mandato de la ONU

**DOMINGO MARCHENA**  
Barcelona

Un dato refleja la importancia de acatar el mandato de la ONU del 2006 sobre el derecho a una vida independiente y de inclusión en la comunidad de las personas con algún tipo de discapacidad: este colectivo representa el 8,3% de la población catalana. Y muchos de sus derechos siguen siendo nominales, no efectivos. “Derechos de papel”, según la titular de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez.

La consellera hizo estas declaraciones en la puesta de largo de Espai Unitari, una plataforma impulsada por treinta organizaciones, fundaciones y oenegés del sector de la discapacidad que quieren recordar que esta directriz de Naciones Unidas para la autonomía personal se aprobó hace más de 16 años y dista mucho de hacerse realidad, aunque “es de obligado cumplimiento”, como admite la propia Mònica Martínez.

“Los recursos se deben adaptar a las personas, y no al revés”, dice Josep Maria Soro, director de TEBVist, la primera televisión en línea creada por personas con discapacidad intelectual. La falta de dinero es la razón más repetida para aplazar el derecho a una vida independiente de quienes se ven obligados “a vivir con su familia o en entornos institucionalizados, aunque quieran emanciparse”.

Pero no se trata solo de destinar más recursos, además hay que emplear mejor los existentes, explica Margarida Saiz, del Moviment Vida Independent Garraf, una de las entidades de Espai Unitari, que nace “para influir en las políticas públicas y para buscar la complicidad del feminismo, que defiende unos cuidados familiares diferentes, y de quienes luchan contra la institucionalización no deseada



Montserrat Vilarrasa fue la presentadora de una de las mesas redondas

de las personas mayores”.

Se han dado pasos inmensos, pero “hay que avanzar más y más rápido”, reconoce la consellera de Drets Socials: “La discapacidad es un problema trans-

**La consellera de Drets Socials: “El progreso de una sociedad no lo marca solo el PIB, sino también estos retos”**

versal y nos puede afectar a todos”. El progreso de una sociedad no lo marca solo el PIB, añadió, “sino también su respuesta ante estos retos”. Es una cuestión de justicia social y, sobre todo, de no dilapidar el ta-

lento de estas personas”.

Personas como la presentadora de una de las mesas redondas, Montserrat Vilarrasa, de la Fundación Catalana Síndrome de Down y activista ante foros internacionales y ante el Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona. “La cuestión no es si se debe mantener o no el actual sistema, sino cómo salir de él”, defiende Facundo Chavez, asesor del Alto Comisionado de la ONU por los Derechos Humanos.

Expertos como la investigadora Martha Yolanda Quezada, la profesora universitaria Maria Pallisera y el abogado Pep Solé argumentaron que las alternativas a ese sistema “son posibles y rentables”. La Administración, explicaron, destina miles de euros a las personas con discapa-

cidad que obtienen una plaza en centros con listas de espera eternas, pero si esas personas deciden irse a vivir con unos amigos reciben solo migajas.

La asistencia personal, uno de los recursos para hacer posible esa ansiada independencia, “pone a las personas en el centro, pero la sociedad pone a las personas en centros”, ironizó Pep Solé, una leyenda del baloncesto en silla de ruedas. La ONU aboga por la desinstitucionalización de la discapacidad. ¿Por qué? Martha Yolanda Quezada, experta en inclusión social, respondió con una encuesta sobre residencias para mayores, y no específicamente de personas con discapacidad. “Solo entre un 20% y un 23% podía decidir cuándo podía asearse o cuándo acostarse”.